



Transparencia cero: Un programa en crisis



Los Objetivos del Milenio y la manipulación estadística

La publicación de las cifras de matrícula escolar correspondientes al año lectivo 2015 y que muestran un pronunciado aumento de niños y niñas en la educación primaria, ha renovado las sospechas sobre la manipulación que el gobierno realiza de las estadísticas nacionales. Es improbable que luego de la caída de la matrícula escolar de educación primaria registrada durante los años del gobierno actual, ahora se produzca un alza del 13.7% respecto al año 2014. No ha habido ningún cambio de

política o actuación extraordinaria del MINED que vuelva creíble esos datos.

Tal vez la explicación se encuentre en que este año, 2015, es el de la medición de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio. Nicaragua se comprometió a cumplir un conjunto de metas específicas para lograr disminuir el nivel de pobreza y marginalidad de los nicaragüenses. La Declaración del Milenio fue suscrita por 189 países, incluyendo Nicaragua, en el año 2000.

Los Objetivos del Milenio incluyen metas para erradicar la pobreza y el hambre, lograr la universalidad de la educación

primaria; promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/Sida y otras enfermedades; asegurar un medio ambiente sostenible y promover una alianza mundial para el desarrollo.

Nicaragua ha contado con variados planes y programas, incluyendo el Plan Nacional para la Erradicación de la Desnutrición Crónica Infantil (2007-2015); el Plan Nacional de Micronutrientes; Programa de Estimulación Temprana de la Niñez; el Programa Nacional de Prevención y Atención del VIH; el Plan Nacional de

Educación (2011-2015); Red de Programas de Seguridad Social y otros, pero los logros son aún escasos.

Al llegar al año 2015, los resultados nacionales son, en lo fundamental, bastante pobres. Vale la pena pasar revista por algunas de las metas con los datos existentes.

¿Hubo reducción de la extrema pobreza?

La primera meta de los ODM era reducir a la mitad la proporción de personas con ingresos inferiores a US\$ 1 por día (extrema pobreza), tomando como base el año 1990. En 1998, la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV) estableció la proporción de personas en condición de extrema pobreza en 17.3%, llegando al 28.9% en el área rural. Una nueva EMNV realizada en el año 2009 encontró que las personas en extrema pobreza representaban el 14.6% de la población total. En poco más de diez años había descendido en 15.6%.

Desde entonces, el gobierno no ha realizado una nueva EMNV y no ha publicado datos oficiales, limitándose a utilizar los producidos por la organización no gubernamental FIDEG cuya base 2009 es completamente diferente a la registrada por la EMNV en ese año.

Según el FIDEG, la extrema pobreza en 2009 ascendía al 9.7% y llegó al 9.5% en 2013. En el área rural, esa organización registró un 18.2% de extrema pobreza en 2009 y 17.1% en 2013. Si usamos la estadística del FIDEG, la reducción de la pobreza extrema nacional fue totalmente simbólica en ese período, apenas del 2%.

Tratando de mostrar buenas cifras, el gobierno ha utilizado una combinación de datos, la EMNV 2009 y los registros de las encuestas del FIDEG de los últimos años. De esa manera, pareciera que la reducción de la pobreza extrema es realmente sustancial. Pero es solamente confusión estadística, usando dos metodologías diferentes, no comparables entre sí.

No es de extrañar que la reducción de la proporción de personas en extrema pobreza sea tan limitada, pues no han existido políticas para reducirla. La EMNV 2009 mostró datos llamativos sobre el alcance de los programas gubernamentales. Según el economista independiente Adolfo Acevedo que construyó tablas estadísticas a partir de las bases de datos publicadas



y luego retiradas, solamente el 12.5% de la población se consideraba beneficiada por algún programa gubernamental, la mitad de ellos se refería al programa de vacunación establecido desde principio de los ochenta.

En los programas insignia del gobierno actual, los datos son sorprendentes. Solamente el 0.3% de la población dijo ser beneficiaria del programa Hambre Cero. Del total de esas personas, apenas el 8.7% se encontraban en condición de extrema pobreza y el 23.1% en condición de pobreza. Dicho de otra manera, casi siete de cada 10 beneficiarios, no eran pobres.

Lo mismo sucedía con el programa Usura Cero. Del total de beneficiarios, apenas el 7% se encontraban en condición de extrema pobreza y el 26.9% en condición de pobreza. Es decir, casi siete beneficiarios de cada 10, no eran pobres. Igual cosa sucedía con el programa de vivienda digna y calles para el pueblo.

A esas alturas, 2009, los programas gubernamentales no estaban orientados a la reducción de la extrema pobreza. Como es conocido, el criterio principal para seleccionar a los beneficiarios ha sido su fidelidad al oficialismo y en no pocos casos, su vínculo o parentela con los oficiales políticos del Frente Sandinista en cada territorio. Esa es una realidad que lejos de cambiar, se ha acentuado. No se puede tener impacto en reducir la extrema pobreza, si los programas no están diseñados para tal fin.

Sin duda, sería de amplio interés nacional contar con una nueva Encuesta de Medición del Nivel de Vida para poder analizar la evolución de la condición de pobreza del pueblo nicaragüense desde 2009. Con la información de que disponemos, es evidente que la meta de reducir a la mitad la proporción de personas en extrema pobreza está lejos de ser cumplida.

Los datos nos dicen que las moderadas y sostenidas cifras de crecimiento económico anuales no han sido equivalentes a reducción de la pobreza. Sigue siendo necesario que existan políticas públicas adecuadas para ello, de lo contrario, no habrá resultados. Pero, tampoco han sido suficientes para la creación de los empleos necesarios.

Desempleo, el problema principal

Una segunda meta de los ODM comprometía al país a promover el empleo pleno y productivo y trabajo decente para cada nicaragüense. La medición de esta meta es más sencilla. Cada vez que se pregunta a los nicaragüenses cuál es su problema principal y el de su familia, responde con toda claridad que es el desempleo. Entre la juventud esta situación es tan álgida que ven en la emigración una solución.

De acuerdo a la última encuesta publicado por la firma M&R Consultores, el desempleo es colocado como problema principal por el 28% de las personas encuestadas. La misma encuesta registró



que un 47.4% de las personas encuestadas afirman que se irían del país si tuvieran la oportunidad. Ese resultado no sorprende pues son conocidas las enormes barreras que enfrentan las personas jóvenes, aún quienes poseen carrera universitaria o técnica, para encontrar trabajo o para iniciar un emprendimiento por su cuenta. Es en ese momento en que las graves falencias de la educación, la baja cobertura y deficiente calidad de la primaria, secundaria y la educación técnica y la deficiente calidad de la educación superior, quedan en evidencia reduciendo las oportunidades de los jóvenes.

Nicaragua se encuentra en un momento en que su población en edad de trabajar es elevada. El país atraviesa lo que los especialistas llaman el bono demográfico, que solo se puede aprovechar si la población joven se incorpora al mercado de trabajo con empleos de calidad. De lo contrario, el bono se habrá perdido y con ella la oportunidad de utilizar las capacidades humanas en la construcción del desarrollo. Hasta ahora lo vamos perdiendo.

Según Acevedo, trabajando con cifras del Banco Central de Nicaragua, la cantidad de personas desempleadas ascendió a 216,500 en 2014 y era de 114,500 en el 2006. De entre quienes poseían alguna fuente de ingresos, el 70% se encontraban en el sector informal y solamente un 26% eran trabajadores asalariados del sector formal.

De nuevo, en este caso, como en lo relativo a la reducción de la pobreza extrema, nos encontramos con una ausencia de políticas públicas destinadas a fomentar la creación de empleo. Las pequeñas empresas y quienes trabajan por cuenta propia, grandes generadores de empleo no son favorecidos por las políticas gubernamentales, sino todo lo contrario. Mientras que a la empresa HKND se le exime de la totalidad del pago de cualquier tasa o impuesto, ofreciendo crear 25,000 empleos a nicaragüenses durante 5 años y luego unos cinco mil permanentes, a los pequeños y medianos empresarios se les aplica la política de persecución del fisco y resto de instituciones, convirtiendo el acceso al sector formal en un verdadero castigo.

Las cifras de remesas familiares se engordan a punta de desempleo y su consecuencia, la emigración. Son las remesas las que han hecho posible la mínima reducción de pobreza lograda. Según un ejercicio realizado por el FIDEG para 2012, la pobreza general, con remesas, alcanzaba el 42.7%, mientras que sin remesas hubiese alcanzado el 46.8%. Son los pobres, los desempleados, los obligados a emigrar, quienes han estado reduciendo la pobreza en Nicaragua. Es lo que dicen las cifras.

Educación primaria sin progreso

En materia educativa, los ODM incorporaron el logro de la educación primaria universal como meta clave. Entre 2006

y 2013, la matrícula de primaria se redujo año con año. En 2006, alcanzó un total de 966,206 estudiantes, llegando a 880,601 en 2013. Para ese año, la tasa neta de matrícula llegó a ser del 85.2%, según Acevedo.

Para alcanzar la universalidad en 2015, había que caminar un tramo que no ha podido vencerse en la última década. Decenas de miles de niñas y niños continúan quedando fuera de las aulas cada año. El Ministerio de Educación no ha estructurado ni implementado ningún programa de extensión de cobertura que hiciera posible cumplir la meta de que todos los niños y niñas en edad escolar estuviesen en la escuela. Esta situación puede explicar el tremendo salto en el reporte gubernamental de la matrícula de este año.

No se puede saber más, pues la página web del Ministerio de Educación no alberga ninguna información estadística, ni registro de matrícula escolar, ni histórico de tasas, absolutamente nada. La única estadística escolar puede encontrarse en los libros del Presupuesto General de la República en el capítulo correspondiente. Para el 2015, la meta propuesta para la primaria regular era de 925,509 estudiantes, menor que la cifra anunciada por la vozera presidencial cuya fuente se desconoce, pues como se ha dicho no hay publicaciones estadísticas institucionales.

El gobierno lo que no puede lograr con políticas públicas, parece querer lograrlo con la manipulación de la información.

Transparencia cero

Un ejercicio de responsabilidad gubernamental sería realizar las encuestas adecuadas para efectuar la medición de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, justo este año en que se cumple el plazo adoptado por el país para cumplir con esos compromisos. Su no realización o la publicación de datos “precocinados”, solo puede elevar las suspicacias y el ánimo escéptico sobre las estadísticas que publica el gobierno como parte de la propaganda gubernamental.

Las dudas no son, ciertamente, sacadas de la manga de quienes critican al gobierno. La voluntad gubernamental ha sido de “transparencia cero”. Como muestra baste citar el caso del Ministerio de Salud.

A la fecha, la sección de estadísticas de salud de la página web del MINSA no tiene ningún documento o publicación. El último boletín epidemiológico publicado es el correspondiente a la semana 22 del año 2014. La sala de situación donde se publicaban los datos epidemiológicos por SI-LAIS y comparativos con los años previos, se encuentra desolada. Las últimas cuentas nacionales de salud fueron publicadas en 2009. El último informe de ejecución presupuestaria publicado corresponde al 2012.

El personal médico del país no tiene forma de conocer la evolución de las principales enfermedades transmisibles, pues los datos no están a mano. Las organizaciones que trabajan para reducir la mortalidad materna desconocen la verdadera estadística. Las agencias de cooperación trabajan con datos antiguos o mezclados. Y quién sabe con qué cifras trabajarán las propias instituciones.

Por si fuera poco, la credibilidad de las autoridades de epidemiología del Ministerio de Salud ha quedado completamente arruinada al haber anunciado que tenía un posible caso de Ébola, sabiendo, como en efecto lo sabían, que era completamente improbable por el tiempo transcurrido y que además había sido descartado por las instituciones correspondientes en los Estados Unidos, lugar de donde procedía el funcionario de la misión diplomática. No se puede mezclar el trabajo de la salud pública con la maniobra política, pues se tienen resultados funestos.

Es similar a la pérdida de credibilidad sufrida por el personal técnico de más alto nivel de INETER, cuando afirmaron que existía toda la evidencia de que la explosión sucedida en los alrededores de la Fuerza Aérea había sido causada por un meteorito que nadie vio y ninguna agencia espacial del mundo pudo registrar. Subordinar el trabajo técnico a la necesidad política golpeó severamente a esa institución.

El Banco Central de Nicaragua ha mantenido un portal con información histórica y contemporánea. Se consideraban cifras confiables en términos generales y las publicaciones incluían estadística que otras instituciones no divulgaban sobre su gestión. Pero hace unas semanas el acucioso economista Adolfo Acevedo les descubrió un bache importante: el BCN había realizado un “ajuste” de cifras publicadas que cambiaron notablemente los resultados del

comportamiento de la inversión privada en los últimos cinco años, favorable a la propaganda gubernamental de inversiones crecientes.

A estas alturas, la pregunta crítica es si el gobierno sabrá cuál es la verdad sobre las estadísticas nacionales y las de su gestión, o será que ha terminado engañado con su propia cocina de datos, una posibilidad bastante real si se considera que la desaparición de datos y el maquillaje de los mismos produce, cuando menos, una confusión.

Todo tiene que ver con lo mismo: la falta de transparencia de la gestión gubernamental. Nadie está autorizado a hablar, a responder preguntas de periodistas, a dar declaraciones, a publicar cifras, el pronóstico meteorológico o el registro de sismos en el territorio nacional. Todo, absolutamente todo, está bajo el control de la coordinadora de comunicación, única que puede hablar de ello, puesto que el inconstitucional Ortega, en sus apariciones, no menciona nada de la gestión gubernamental.

La falta de información es casi total. La noticia sobre el mal estado de las finanzas del INSS ha circulado profusamente en las últimas semanas sin que haya aparecido autoridad alguna de la institución aclarando o explicando las cifras. Los diputados del MRS y el PLI de la Asamblea Nacional

han solicitado en varias ocasiones la comparecencia del presidente del INSS para informar al parlamento y al público, sin ningún resultado.

Tampoco las repetidas solicitudes para que la Policía, el Ejército y otras instituciones comparezcan a informar han logrado que los funcionarios correspondientes se presenten, en un alarde de irresponsabilidad en el cumplimiento de sus deberes. El oficialismo que controla la junta directiva de la Asamblea Nacional y las comisiones, mantiene una férrea política de bloqueo de toda solicitud de información o comparecencia en las comisiones o en el plenario.

La apuesta a la política de “transparencia cero” supone que la divulgación de datos oficiales solo debe hacerse si favorece la imagen del gobierno. Está regida por el criterio que el control de las fuentes de información permitirá que cualquier afirmación se vuelva creíble. En realidad, con el tiempo se invierte la ecuación: es tal el cúmulo de información dudosa que se termina por no creer nada de lo que afirman las fuentes oficiales. A ese punto está llegando la divulgación gubernamental. Es lo que sucede con los datos de la matrícula escolar, del Ébola y lo que sucedió con el meteorito, convertido en objeto de burla nacional.